

REVISTA DE DERECHO

AÑO XXII - JULIO - SEPTIEMBRE DE 1954 N.º 89

DIRECTOR: ORLANDO TAPIA SUAREZ

CONSEJO CONSULTIVO:

ROLANDO MERINO REYES
ALEJANDRO VARELA SANTA MARIA
JUAN BIANCHI BIANCHI
QUINTILIANO MONSALVE JARA
MARIO CERDA MEDINA
EMILIO RIOSECO ENRIQUEZ



ESCUELA TIPOGRAFICA SALESIANA - CONCEPCION (CHILE)

COLABORACION DEL SEMINARIO
DE DERECHO PUBLICO

-ALBERTO PUGA SEGUEL

**Abogado y Ayudante del
Seminario de Derecho Público**

**LA CONTRIBUCION A LOS GASTOS EN LAS
SOCIEDADES LEGALES MINERAS**

1.—Generalidades.

La Sociedad Legal Minera tiene un patrimonio propio y distinto del de los socios que forman parte de ella.

Este patrimonio se compone, en primer lugar, de la pertenencia o pertenencias cuya inscripción hizo nacer a esta sociedad. Lo dicho resulta de los artículos 139 y 140 del Código de Minería. Expresan las citadas disposiciones: Artículo 139: "El Conservador de Minas, cuando se le presentare para su inscripción alguno de los títulos constitutivos de sociedad a que se refieren las disposiciones precedentes después de inscribirlo en el Registro de Descubrimientos, o en el de Propiedad, según el caso, deberá hacer a continuación, en el mismo Registro, una nueva inscripción a favor de la sociedad, bajo el nombre de ésta..."; y agrega el artículo 140: "Verificada la inscripción a favor de la sociedad, ésta adquiere la pertenencia, conservando sus miembros un derecho o acción mueble con relación a la sociedad".

En otras palabras, inscrito en el Conservador de Minas el título constitutivo de la sociedad, a favor y a nombre de ésta, la

pertenencia o pertenencias pasan a ser del dominio de la persona jurídica "sociedad minera" y los socios, con relación a ella, sólo tienen un derecho o acción mueble.

Este aporte a que hemos hecho mención se forma y cumple por el solo mandato de la ley, puesto que en estas Sociedades Legales no hay un convenio previo que importe la voluntad de los socios de efectuarlo, como sucede en otras sociedades en que se estipula el aporte en el contrato social. En efecto, en las Sociedades Legales Mineras basta el hecho de la inscripción, a nombre de la sociedad del título constitutivo de ésta, para que la pertenencia o pertenencias se entiendan aportadas a ella.

Pero no sólo las pertenencias forman parte del patrimonio de esta sociedad, sino que él está compuesto, además, de los aportes en dinero, especies, maquinarias, etc., que hicieren los socios; de las instalaciones, establecimientos de beneficio de minerales, etc., y en general de todo aquello que a cualquier título se incorpore a la sociedad y que los socios hubieren acordado en las juntas de accionistas.

Resumiendo, podríamos distinguir en el patrimonio de la Sociedad Legal Minera: uno legal, constituido por la o las pertenencias y que no puede faltar; y un patrimonio aportado voluntariamente, que pueden acordarlo o no los socios, y que denominaremos capital de explotación.

Tenemos, entonces, de acuerdo con lo dicho precedentemente, que el capital o patrimonio de las Sociedades Legales Mineras está constituido por las pertenencias mismas: capital legal, y por los aportes de los socios: capital de explotación. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en otra clase de sociedades, estos aportes no son fijos ni se estipulan previamente, sino que se van entregando a medida que van surgiendo las necesidades de explotación o conservación de las pertenencias sociales. Es así, como no se contribuye una sola vez a los gastos, sino tantas veces cuantas sean las necesidades de conservación y explotación a que haya que satisfacer.

Pocas empresas se presentan en la vida de los negocios con más sorpresas que las explotaciones mineras y, por lo general, mientras no se "forma mina", es necesario hacer una serie de inversiones casi siempre imprevistas. Por esto, habría sido muy en-

LAS SOCIEDADES LEGALES MINERAS

277

gorroso, cuando no impracticable, haber adoptado el sistema de modificación del estatuto social para aumentar el capital, como en las colectivas, o el procedimiento para los aumentos de capital que rige en las anónimas.

De ahí, pues, que el legislador ideó este sistema que, como decíamos, es más útil, justo y práctico y al cual nos referiremos en seguida.

2.—Forma como se determina la cuota con que cada uno de los socios debe contribuir a los gastos.

La Junta de Accionistas, por medio de un acuerdo, fija el monto de las cuotas con que deben contribuir los socios a los gastos necesarios de conservación y explotación de las pertenencias. Este acuerdo deberá ser tomado "por socios que representen a lo menos la mayoría absoluta de las acciones de la sociedad" (artículo 162 inciso 2.º).

A esta Junta deberá asistir un Notario, a fin de que certifique la asistencia de los socios, los acuerdos tomados y la mayoría con que fueron adoptados. Una copia del acta de la Junta, autorizada por un Notario, deberá llevarse, dentro del plazo de ocho días, al Conservador de Minas respectivo para su archivo (artículo 153). Ni el Código ni su Reglamento señalan el Registro en donde debe archivarse la copia del acta a que hacíamos referencia. Nosotros, teniendo en cuenta la relación existente entre las cuotas de gastos y las acciones de la sociedad, creemos que debe efectuarse esta diligencia en el Libro de Accionistas.

Si todos los socios asistieron a la Junta en que se determinó el monto de los gastos a que deben contribuir, no es necesario hacer otros trámites; pero en caso de que falten algunos, es menester dar a conocer este acuerdo a los socios inasistentes mediante la publicación de él por dos veces en el Boletín Minero del departamento. La notificación del acuerdo, en este caso, se entiende hecha desde que se cumplió con la formalidad indicada; pero a los socios que residan en el departamento en donde la sociedad tiene su domicilio y que, para el efecto de las notificaciones, hubieren anotado su domicilio en el Libro de Accionistas, deberá enviárseles por el Secretario del Juzgado carta certificada, dejándose de ello

constancia en autos (1) (artículos 145 inciso 2.º y 3.º y 162 inciso 1.º).

3.—Obligaciones y derechos de los socios a este respecto.

"Los socios contribuirán al pago de los gastos necesarios para la conservación y explotación de la pertenencia, en proporción a las acciones que tengan en la sociedad" (artículo 161).

La sociedad necesita de recursos económicos para poder producir y para conservar su patrimonio. Nadie más que los socios pueden proporcionarle estos recursos, y es la única obligación que tienen para con la Sociedad Legal Minera. Por otra parte, por una razón de equidad, la ley ha dispuesto que deben contribuir a los gastos en proporción a sus acciones. Es necesario, sin embargo, dejar bien en claro, que los gastos a que están obligados a contribuir los asociados son única y exclusivamente los necesarios para la conservación y explotación de la o las pertenencias de la sociedad. Así, por ejemplo, quedarán comprendidos en estos rubros, los salarios de los obreros, los relacionados con el pago de patentes mineras, la compra de herramientas, los gastos de extracción de minerales, etc. No estarán incluidas en estos gastos, las instalaciones accesorias no comprendidas en el giro ordinario de la sociedad, como edificación de almacenes, pulperías, etc.

El espíritu del legislador al restringir la contribución de los accionistas a los gastos de conservación y explotación, no fue otro que el de proteger los intereses de la minoría, pues se observó, al discutirse en la Comisión Mixta de Senadores y Diputados el proyecto del Código de Minería de 1930, que la obligación amplia de los socios de contribuir a todo gasto social podría entrañar perjuicios a la minoría. Así, por ejemplo, la mayoría podría acordar contribuciones y gastos excesivos, y perseguir mediante el juicio de inconcurrencia a la minoría que no pudiese sufragar tales gastos,

(1) "El acuerdo que se tome en junta de socios para fijar el monto de las cuotas con que cada uno debe concurrir a los gastos de conservación y explotación de la pertenencia minera debe ser publicado, y notificado cuando dicha notificación procede, en la forma prescrita por la ley, requisito indispensable para poder cobrar judicialmente a los socios morosos" (Gaceta de los Tribunales. Año 1942. Primer Semestre. Página 203).

LAS SOCIEDADES LEGALES MINERAS

279

a fin de excluirla de la sociedad. Fue por esto, que el legislador limitó la contribución de los accionistas a los gastos ya señalados, pues el objeto por ellos perseguido es justificado en todo caso.

Sin embargo, y a pesar del plausible espíritu del legislador, consideramos demasiado restringida la aplicación del artículo 161 del Código de Minería, porque puede haber gastos que, sin perseguir directamente el fin de explotación y conservación de la o las pertenencias, son necesarios e indispensables para la sociedad, como ser, los de transporte de minerales hasta el lugar de su beneficio, etc.

En la forma que ha quedado la norma comentada, las Sociedades Legales Mineras llevarán una vida lánguida y estática y, tal vez, perjudicial para la economía nacional, pues no podrán industrializar en forma sus faenas mineras, ni organizarse como verdaderas empresas. Pudo el legislador haber buscado otras soluciones más prácticas para las injusticias, que, con razón, quiso evitar (2).

El derecho que los socios tienen sobre el particular es el de reclamar del acuerdo que fija la cuota para la contribución a los gastos. Pero antes de referirnos al procedimiento de reclamación, es necesario recalcar que sólo es procedente cuando la cuota o cuotas exigidas no sean necesarias para la conservación o explotación de las pertenencias sociales. En caso contrario, es decir, cuando la cuota o cuotas que acuerde la Junta sean indispensables para los fines indicados, deberá desecharse el reclamo. Así se dejó constancia en la Comisión Revisora del Código de Minería de 1932 (artículo 162 inciso 3.º).

4.—Acción de impugnación al acuerdo que fija la contribución a los gastos.

El legislador estableció la acción a que se refiere el artículo 152 inciso 3.º, con el único y exclusivo objeto de proteger los intereses de la minoría y evitar que, mediante golpes de mayoría, se elimine aquélla. El pensamiento expuesto fué también el de la Comi-

(2) Julio Ruiz Bourgeois. "Instituciones de Derecho Minero Chileno". Tomo II, página 180.

sión Mixta de Senadores y Diputados durante el estudio del proyecto de Código de 1930. En efecto, en aquella oportunidad se dijo que esta acción tenía también por objeto "procurarle a la minoría un resguardo efectivo en contra de las posibles maquinaciones dolosas que la mayoría pueda intentar con el propósito de excluirla".

Este reclamo o impugnación puede intentarse no sólo por el socio que no concurrió a la Junta, sino también, aún por aquél que hubiere tomado parte en el acuerdo. Así se dejó testimonio en las actas de la Comisión.

Para que el reclamo o impugnación pueda prosperar, según se desprende del artículo 152 inciso 3.º, es menester la concurrencia copulativa de dos requisitos:

- a) Que la demanda sea entablada dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de la celebración de la Junta. Este plazo es de días corridos y no se suspende por la interposición de feriados. El no ejercicio del derecho a reclamo dentro de este plazo, lo hace caducar; y
- b) Que sea de manifiesto que el acuerdo que se pretende celebrar, sea perjudicial para los intereses de la sociedad.

El Juez que conoce del reclamo es el de Mayor Cuantía en lo Civil (artículo 203).

Esta acción o reclamo debe dirigirse en contra de la Sociedad Legal, o mejor dicho, en contra de su representante legal que es el administrador de la Sociedad Legal Minera, por cuanto tiene por objeto dejar sin efecto un acuerdo de ella.

"Este reclamo se tramitará en juicio sumario, pero el fallo que se dicte será apelable en ambos efectos. En segunda instancia se tramitará como incidente. No procederán en contra de la sentencia los recursos de casación" (artículo 152 inciso final).

La razón por la cual no proceden los recursos de casación está en que se resuelve aquí un asunto más de equidad que de derecho. Estimamos, sí, que lo dicho es sólo aplicable al recurso de casación en el fondo mas no al de forma, pues este último no sanciona sino la infracción a las leyes procesales.

LAS SOCIEDADES LEGALES MINERAS

281

5.—Plazo para efectuar la entrega de la cuota.

En el mismo acuerdo en que se aprobó el monto de la cuota con que cada uno de los socios debe contribuir a los gastos, deberá señalarse el plazo para efectuar la entrega, lo que es lógico si se piensa que no puede exigirse la entrega de la cuota inmediatamente, ni tampoco dejar sujeto al criterio de los socios la fijación del plazo para entregarla.

En el caso en que la Junta no hubiere señalado plazo, el pago de las cuotas debe efectuarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que quedó terminada la publicación del acuerdo que fijó el monto de dichas cuotas, y a que se refiere el inciso 1.º del artículo 162 en relación con el artículo 145.

Para mayor claridad en la exposición, terminaremos este punto copiando el artículo 162 que en su inciso final dice: "Las cuotas deberán pagarse, si no se hubiere señalado plazo para ello, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que quede terminada la publicación referida".

6.—¿Es válida la exención de contribuir a los gastos?

Es sabido que el descubridor de una mina requiere de abogados, ingenieros, etc., a fin de que lo dirijan o ayuden en todo lo que se refiere con la constitución de la propiedad minera, mensura, explotación de la pertenencia, etc.

Ahora bien, puede suceder, como con frecuencia ocurre, que el minero, el descubridor, sea hombre de escasos recursos y no pueda pagar los servicios de estos profesionales; en esta situación, el minero recurre a un capitalista a quien propone formar una sociedad a trueque de que él pague los honorarios de estos profesionales, conviniéndose, además, que el capitalista, por los gastos hechos, adquirirá acciones liberadas de la sociedad, es decir, exentas de contribuir más tarde a los gastos de conservación y explotación.

Pues bien, ¿vale el convenio que exime a uno o algunos de los socios de contribuir a los gastos? ¿Reconoce la jurisprudencia este convenio? ¿Contraviene este acuerdo a lo dispuesto en el artículo 161, que impone a todos los socios la obligación de contribuir a los gastos de conservación y explotación a prorrata de sus acciones? O, en otras palabras, ¿puede haber en las Sociedades de nuestro

estudio, acciones liberadas? ¿Una estipulación en este sentido, hace de la Sociedad Legal Minera una contractual, por constituir una modificación a las reglas de la Sección 1.ª del Título XII del Código de Minería?

Veamos separadamente cada una de las preguntas expuestas precedentemente.

A) No hay duda que el convenio que exime a uno o más de los socios de contribuir a los gastos, es válido. La propia ley así lo reconoce, al señalar, como una de las excepciones que puede hacer valer el ejecutado en el juicio de inconcurrencia, "el hecho de existir un convenio o un acuerdo legalmente tomado, que exima al demandado de la obligación de concurrir con la cuota que se le exige" (artículo 167 N.º 6.º).

Esta norma, junto con reconocer la existencia de estos convenios, les reconoce validez, ya que las partes pueden, de acuerdo con las reglas generales del derecho, estipular lo que deseen, siempre que no vaya en contra de la ley y el derecho ajeno. En ninguna parte del Código prohíbe esta estipulación, por el contrario, la disposición citada reconoce su existencia y, por ende, su validez.

B) Nuestra jurisprudencia en varias ocasiones le ha reconocido validez a un convenio de esta naturaleza (3). Exige, sí, que si se quiere establecérselo, debe ser expresado en forma determinada y clara, pues —ha dicho— no bastan expresiones generales, vagas e indeterminadas, para atribuir a un convenio de esta naturaleza, el alcance de exonerar a uno o más de los socios de los gastos de conservación y explotación de la o las pertenencias.

C) No contraviene este acuerdo al artículo 161. Dice esta disposición: "Los socios contribuirán al pago de los gastos necesarios de conservación y explotación... etc.", pero no sanciona la contravención, como debió haberlo hecho, si ésta hubiera sido la intención del legislador.

Si dentro de las disposiciones del Código se autoriza, tácitamente, la existencia de un acuerdo que exima a ciertos socios de

(3) Revista de Derecho y Jurisprudencia: Tomo XXV. 2.ª Parte, Sección 1.ª, página 385; Tomo XXX. 2.ª Parte, Sección 1.ª, página 300.

LAS SOCIEDADES LEGALES MINERAS

283

concurrir a los gastos, no puede decirse que éste contraviene la disposición del artículo 161. Por otra parte, es sabido, que puede hacerse, en Derecho Privado, por las partes todo aquello que la ley no prohíbe; el acto o contrato celebrado en estas condiciones es perfectamente válido.

D) Por último, la estipulación que exige a uno o más de los socios de contribuir a los gastos, no hace de la Sociedad Legal Minera una contractual, ya que este acuerdo no importa una modificación a las reglas de la Sección 1.ª del Título XII.

Como se sabe, cualquiera innovación a las reglas de la Sección 1.ª del Título XII del Código de Minería, hace que la Sociedad Legal se convierta por este hecho en contractual, es decir, de aquellas que se rigen por la Sección 2.ª del mismo Título. No es éste el caso; "innovar" significa, según el Diccionario de la Real Academia, "modificar, mudar o alterar las cosas introduciendo novedades". Aquí no se modifica ni se altera nada, menos se introducen novedades. Simplemente, los socios ejercitan un derecho que la ley no prohíbe, muy por el contrario, ejercen un derecho que la ley tácitamente autoriza.

Del mismo modo que no deja de ser Sociedad Legal aquella en que los socios cambiaron el domicilio que le señaló la ley, así, tampoco, deja de serlo, por el hecho de existir en ella acciones liberadas, acciones que no implican para el socio que las posee la obligación de contribuir a los gastos. La única diferencia que podríamos encontrar entre estos dos ejemplos es, que en el primero la autorización del legislador es expresa, siendo en el segundo, tácita.

Resumiendo: Es válido el acuerdo que exige a uno o más de los socios de la contribución a los gastos, sin que ello signifique una contravención a lo dispuesto en el artículo 161, ni tampoco, una modificación a las reglas de la Sección 1.ª del Título XII del Código de Minería.

Nos queda por estudiar, para finalizar este número, la forma en que debe efectuarse esta exención.

Dice el artículo 167 N.º 6 del Código del ramo: "El ejecutado sólo podrá oponer las siguientes excepciones: 6.ª El hecho de

existir un convenio o un acuerdo legalmente tomado, que exima al demandado de la obligación de concurrir con la cuota que se le exige".

Dos son, pues, las formas que autoriza la ley para efectuar esta exención, según se desprende del precepto recién transcrito:

1.º) Un convenio.

Convenio es sinónimo de convención y ésta es "el consentimiento de dos o más personas sobre una misma cosa o hecho" (4).

Para que el convenio quede perfecto basta únicamente la concurrencia de voluntades de los socios. Sin embargo, en la práctica, y con el fin de evitar toda dificultad que con respecto a la prueba pueda presentarse, cuando esta estipulación se oponga como excepción por el socio en cuya contra se siga el juicio de inconcurrencia, creemos conveniente que debe constar por escritura pública.

Decíamos que basta el acuerdo de todos los socios, sea que éstos manifiesten su voluntad verbalmente o por escrito, para que el convenio quede perfecto. Sin embargo, estimamos que esto es validero cuando la unanimidad de los socios da su consentimiento en el convenio, ya que tratándose de convenios de esta naturaleza, entre socios y extraños o, entre dos o más socios de los muchos que componen la sociedad, es necesaria la aprobación de la Junta.

Un ejemplo aclarará esta idea. Supongamos que uno de los socios vende sus acciones, que no son liberadas, a un tercero extraño a la sociedad o, sencillamente, a otro socio, estableciéndose en el contrato de venta qué acciones estarán exentas de concurrir a los gastos, es decir, que son liberadas. ¿Podría este tercero extraño que por la compra de acciones pasó a ser socio, o el socio comprador, oponer como excepción esta estipulación cuando la sociedad le exija que contribuya a los gastos? Estimamos que no, pues como lo decíamos anteriormente, para que tenga valor la estipulación en que se establezca que las acciones son liberadas, es menester la aprobación de la Junta; una estipulación de esta naturaleza no afecta a la sociedad ni le impide, por lo tanto, exigir del

(4) Joaquín Escriche. "Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia". Página 518.

LAS SOCIEDADES LEGALES MINERAS

285

comprador que concurra a los gastos de conservación y explotación.

La jurisprudencia nos da la razón en lo que venimos sustentando, pues ha expresado que "no habiendo intervenido la Compañía en la venta de acciones, en que se establece que son habilitadas y la venta es libre de todo gravamen u obligación, dicha venta no produce efecto legal alguno en contra de la Compañía que es un tercero en el contrato. Dicho contrato, en cuanto se estipula que las acciones son habilitadas y no están sujetas a gravámenes u obligaciones, sólo origina obligaciones personales del vendedor para con el comprador, y no exonera al dueño de las acciones de la obligación de concurrir a los gastos que cobra la Compañía de conformidad al acuerdo legalmente tomado" (5).

2.º) Un acuerdo.

Sobre esta forma de exención a los gastos, la única observación que puede hacerse es la que indica el artículo 167 N.º 6.º, es decir, que sea "legalmente tomado".

Con respecto a los acuerdos, y dado que nuestro trabajo no se refiere a ellos, nos remitimos a lo señalado en el Párrafo II de la Sección 1.ª del Título XII del Código de Minería, haciendo notar, sí, que, a nuestro parecer, este acuerdo deberá ser tomado en Junta, por socios que representen a lo menos la mayoría absoluta de las acciones de la sociedad, debiendo concurrir a dicha Junta un Notario, a fin de que éste certifique la asistencia de los socios, los acuerdos que se tomaren y la mayoría con que éstos hubieren sido adoptados, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 153.

Por último, y para terminar este punto, es necesario hacer notar que por un convenio o por un acuerdo legalmente tomado, sólo puede eximirse a uno o más de los socios de la contribución a los gastos, mas no de la contribución en las pérdidas de la sociedad. Este último acuerdo, en el caso que se tomare, sería contrario no sólo a la equidad, sino también a la esencia del contrato de

(5) Revista de Derecho y Jurisprudencia: Tomo XXX, 2.ª Parte, Sección 1.ª, página 300.

sociedad; en consecuencia, una estipulación semejante es nula de nulidad absoluta.

7.—Sanción que acarrea el no pago de las cuotas.

Los socios que no estén en posesión de acciones liberadas que los eximan de la contribución a los gastos, y que no efectúen el pago de las cuotas dentro del plazo convencional o legal, según los casos, incurren en una sanción especial: la inconcurrencia.

★ ★ ★ ★ ★